



EN ESTE NÚMERO | *IN THIS ISSUE*

Beneficios tributarios para la investigación, desarrollo e innovación

Tax benefits for research, development and innovation

El “beneficio” del home office y la aplicación del teletrabajo

The “benefits” of home office and the implementation of teleworking

La inteligencia artificial: una aliada para las comunicaciones empresariales

Artificial Intelligence: an ally for business communications

La responsabilidad objetiva en los actos de infracción a los derechos de propiedad industrial

Strict liability in industrial property rights infringement



La inteligencia artificial: una aliada para las comunicaciones empresariales

5 CAROLINA PALACIOS
Presidenta de BCW Sudamérica



¿Es posible suplir un requisito de forma de nuestro ordenamiento civil adjetivo con alguna de las fuentes del derecho como lo es la Ley del Silencio Administrativo Positivo?

8 CHRISTIAN CORNEJO SALDAÑA
Socio especialista en litigios y controversias, sede de Trujillo



COMENTARIO TRIBUTARIO

Beneficios tributarios para la investigación, desarrollo e innovación

11 ANDRÉS DELGADO CÁCERES
Asociado senior, especialista en derecho tributario. Sede Arequipa



La responsabilidad objetiva en los actos de infracción a los derechos de propiedad industrial

14 MELISSA COSTA ESPEJO
Asociada senior, especialista en propiedad intelectual



LEGAL TECH

El contrato de *advergaming* como estrategia comercial de venta en la era tecnológica

17 ANTHONY BRINGAS ANGULO
Abogado, sede Trujillo



ALERTA MAXIMA

Modifican ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas

20



EL EXPERTO

El no cobro de la cláusula penal en las contrataciones con el Estado como evidencia del perjuicio en el delito de colusión desleal agravada

26 KARIN FERNANDEZ MUÑOZ
Socia senior especialista en derecho penal



De la posibilidad de accionar por responsabilidad civil, ante la existencia de daño causado, por el no reconocimiento de un hijo

29 NURIA DE AMAT CATACORA
Socia especialista en litigios y controversias, sede Arequipa



DESDE EL CONGRESO

- * Fijar por ley los feriados largos para promover el turismo interno.
- * Evitar que bancos cobren deudas desde cuentas sueldo.

32



COMENTARIO LABORAL

El “beneficio” del *home office* y la aplicación del teletrabajo

34 PAOLA DEL VILLAR JARA
Asociada especialista en derecho laboral



Inteligencia artificial y administración de justicia

36 JAVIER CORNEJO PORTOCARRERO
Socio especialista en derecho penal, sede Arequipa



Actividades institucionales

39



COLUMNAS
- REVISTA LEGAL -
NÚMERO 212

ESTUDIO **MUNIZ**
MUÑOZ OLAYA MELÉNDEZ CASTRO ONO & HERRERA Abogados

Comité Editorial:
Fernando Meléndez
Arturo Ferrari
Silvia Núñez
Alexandra Ojeda

Comentarios y sugerencias:
aferrari@munizlaw.com
snunez@munizlaw.com

El contenido de la revista es académico. No debe ser interpretado como adelanto de opinión del Estudio, ni deben extraerse recomendaciones para decisiones legales específicas. El contenido de esta publicación no puede ser reproducido, divulgado o registrado, sin autorización previa y por escrito de Muñoz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados®.

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú
N° 2007-07703

OPENSAC editor.open@gmail.com
IDEAS & SOLUCIONES T. (51) 936 645 459

“¿Cuántas muertes más quieren?”¹

“Si nosotros no somos capaces de hacer preguntas escépticas, para interrogar a quienes nos dicen que algo es verdad, entonces estamos a merced del próximo charlatán político o religioso que aparezca.”

Carl Sagan

La desafortunada frase la pronunció la presidenta en funciones, Dina Boluarte, mientras brindaba declaraciones a la prensa en el marco de una actividad oficial que, con un grupo de ministros y autoridades, realizaba en la región Piura, azotada - esta vez - por la epidemia del dengue. Pretendía así aplacar, o desincentivar, la convocatoria que diversos colectivos ciudadanos acababan de realizar para llevar a cabo nuevas protestas en contra del gobierno que “provisionalmente” dirige.

Medio año ha transcurrido desde que Dina Boluarte asumió, en su condición de vicepresidenta, el cargo de presidenta de la república, luego del affaire provocado por Castillo y su intentona de golpe de Estado, hecho que provocó su vacancia por el Congreso de la República.

Todo parece indicar que su gobierno con un alto índice de desaprobación (80%)² o, lo que es lo mismo, con una aprobación muy baja, se extenderá (salvo vacancia del Congreso mediante) hasta julio del 2026, completando así el periodo presidencial para el que fue elegido el desafortunado presidente Castillo.

Su alta desaprobación se explica, entre otras cosas, por los más de 60 muertos que la represión de su gobierno (desde todo punto de vista desproporcionada) ocasionó en las marchas de inicios de año, de las que nadie se ha hecho cargo y de las que ella groseramente se desmarcó (“...yo puedo ser la jefa suprema de las FF.AA. pero no tengo comando...”).³

El problema es que tal violencia o el producto de esta, las más de 60 muertes, ha pretendido ser utilizada muy torpemente por ella misma



FERNANDO MELÉNDEZ FERNÁNDEZ

Socio principal - editor

para desincentivar las anunciadas nuevas manifestaciones, lo cual, evidentemente, muy flaco favor le hizo al propósito, así su verdadera intención haya sido, quizás, otra.

Mientras tanto, en la otra orilla, el Congreso de la República, cuyo grado de desaprobación es aún mayor y la permanencia de sus actuales integrantes otra de las razones que explica la deslegitimidad de la presidenta (al no haber optado por el adelanto de elecciones presidenciales y congresales), sigue socavando la institucionalidad del país con decisiones inexplicables, como, por ejemplo, la reciente designación como defensor del pueblo de una persona que no reúne las mínimas condiciones para ostentar ese cargo o la promulgación del proyecto de ley que pretende el nombramiento automático (sin ningún tipo de examen previo) de docentes en la educación pública, cada vez más venida a menos.

¿Qué podemos esperar los ciudadanos de la próxima elección de su junta directiva? Seguramente nada bueno, ni distinto a lo que nos han demostrado en los últimos meses.

El país, por su parte, que poco parece importarle al Ejecutivo y Legislativo, sigue a la deriva, enfrentando, en el norte, la adversidad del dengue; en la sierra sur el previsible friaje y a nivel nacional el inminente fenómeno de El Niño (cuyos efectos en la economía sin duda agudizarán la crisis en la que nos colocó la pandemia); así como el alarmante incremento de la delincuencia organizada.

Menos mal, como dice el dicho popular, que “Dios es peruano” y nuestra gastronomía la mejor del mundo.)))

¹ Dina Boluarte, declaraciones a la prensa, 14 de junio del 2023.

² (<https://data.larepublica.pe/encuesta-iep-peru-aprobacion-desaprobacion-presidencia-congreso-de-la-republica-ejecutivo-legislativo/junio-2023/>)

³ Dina Boluarte, declaraciones al diario El Comercio, 7 de mayo del 2023

“How many more deaths do you want?”

“If we are not able to ask skeptical questions, to interrogate those who tell us that something is true, to be skeptical of those in authority, then we’re up for grabs for the next charlatan, political or religious, who comes ambling along.”

Carl Sagan

The unfortunate phrase was pronounced by the sitting President, Dina Boluarte, while giving a statement to the press in the framework of an official activity that she -along with a group of ministers and authorities- was carrying out in the Piura region, which has been hit -this time- by the dengue epidemic. In this way, she intended to placate, or discourage, the call that several citizen groups had just made to carry out new protests against the government she “provisionally” leads.

Half a year has passed since Dina Boluarte, in her capacity as Vice-president, took office as President of the Republic, after the affair caused by Castillo and the coup d’état attempt that caused his impeachment by the Congress of the Republic.

Everything seems to indicate that his government, that shows a high disapproval rate (80%)² or, in other words, has a very low approval rate, will continue (unless the Congress is vacated) until July 2026, thus completing the presidential term for which the deposed President Castillo was elected.

Her high disapproval rate is explained, among other things, by the more than 60 deaths that her government’s repression (absolutely disproportionate) caused in the protests by the beginning of the year, for which no one has been held accountable and for which she rudely dissociated herself (“...I may be the Supreme Chief of the Military, but I have no command...”).³

The problem is that she has very clumsily used such level of violence or the product of it - more than 60 deaths - to

discourage the announced new protests. This, obviously, did a big disservice to her purpose, even though her true intention could have been -perhaps- another.

Meanwhile, on the other side, the Congress of the Republic, which disapproval level is even higher and the permanence of its current members is another reason that explains the illegitimacy of the President (since they have not opted to call snap presidential and Congress elections), keeps undermining the country’s institutions with its inexplicable decisions such as, for example, the recent appointment as Ombudsman of a person who does not meet the minimum qualifications to hold that position, or the enactment of the bill that seeks the automatic appointment (without any prior examination) of teachers in public education, an institution that is becoming more and more dilapidated.

What do citizens can expect from the next election of its “board of directors”? Most likely, nothing good or different than what they have shown in recent months.

The country, on the other hand, which seems to be of less importance to the Executive and Legislative branches, keeps on drifting and faces the adversity of dengue fever in the north; in the southern Andes, the foreseeable friaje (extremely cold weather); and, nationwide, the imminent El Niño phenomenon (which effects on the economy will surely worsen the crisis caused by the pandemic). Also, the alarming increase in organized crime.

Luckily, as the saying goes, “God is Peruvian” and our gastronomy is the best in the world.)))

¹ Dina Boluarte, statement to the press, June 14, 2023

² (<https://data.larepublica.pe/encuesta-iep-peru-aprobacion-desaprobacion-presidencia-congreso-de-la-republica-ejecutivo-legislativo/junio-2023/>)

³ Dina Boluarte, statement to El Comercio journal, May 7, 2023



La inteligencia artificial: una aliada para las comunicaciones empresariales

De acuerdo con la última encuesta global de McKinsey sobre inteligencia artificial (IA), en los últimos cinco años la adopción de esta herramienta se ha multiplicado: se estima que desde el 2017 hasta fines de 2022, su uso en el mundo corporativo había crecido 2.5 veces. Y aún queda un largo camino por recorrer, pues se espera que la inversión en esta disciplina aumente en los siguientes tres años, así como las áreas en las que se aplique.

Una de las industrias más impactadas por la llegada de esta herramienta definitivamente ha sido la comunicación. La inteligencia artificial se ha introducido en la manera en la que recibimos, generamos y compartimos información en nuestro día a día.

Su implementación en nuestro sector, por una parte, ayuda a mejorar el rendimiento, la eficiencia y la productividad de nuestros procesos, al permitir, por ejemplo, procesar altos volúmenes de datos para comprender mejor a nuestras audiencias y tomar decisiones basadas en evidencia, además de automatizar la generación de contenido multimedia. No obstante, también representa algunos riesgos, como la distorsión de la comunicación por falta de información o sesgos y la poca trazabilidad de las fuentes usadas. Además, nos plantea algunos dilemas éticos y hasta legales relacionados con la transparencia en el uso de la herramienta para el desarrollo de productos de comunicación; la confidencialidad y privacidad de los datos compartidos; y el respeto de los derechos de autor de los materiales disponibles en la web.

Sin embargo, el mayor riesgo de todos es no entender cómo podemos capitalizar las oportunidades que la herramienta nos brinda, si no somos capaces de adaptarnos a su evolución con suficiente celeridad.

Por eso, la gran pregunta que debemos plantearnos es cómo aprovechar sus ventajas de una forma correcta y segura, que genere valor para nuestro negocio y stakeholders, e incentive innovación que nos ponga a la vanguardia en nuestros sectores.

En principio, lo más importante es analizar los riesgos e implicaciones éticas y legales de su uso, revisar cuál plataforma es la más adecuada dependiendo de la necesidad y el core de la compañía, y seleccionar muy bien la información que exponemos. En el caso de las empresas de comunicación, también es imprescindible ser abiertos y transparentes con lo que compartimos.

Ahora bien, sin importar el perfil del negocio, es clave reconocer que la IA apoya y complementa las habilidades de nuestras personas; no las reemplaza. El talento humano debe guiar la inteligencia artificial para lograr una comunicación efectiva y genuina. Sin nuestras capacidades cognitivas, criterio y priorización, el contenido generado por la IA será vacío y no permitirá que la marca logre conectar con las personas. De allí la importancia de capacitar al talento y brindarle un entorno seguro y de confianza para aprender, incluso de los errores, y utilizarla como un catalizador de sus propias ideas, en lugar de sustituto de la inventiva personal.

Por último, es importante reconocer que, como cualquier herramienta, no es perfecta y está en constante evolución, por lo que debemos mantenernos atentos a los cambios que se vayan dando en la disciplina para sacar el máximo provecho de ella.))

Una de las industrias más impactadas por la llegada de esta herramienta definitivamente ha sido la comunicación. La inteligencia artificial se ha introducido en la manera en la que recibimos, generamos y compartimos información en nuestro día a día.



CAROLINA PALACIOS
Presidenta de BCW Sudamérica
President of BCW Sudamerica (BCW South America)

Artificial Intelligence: an ally for business communications

According to the latest McKinsey global survey about artificial intelligence (AI), in the last five years, there has been a growth in the use of this tool. It is estimated that its use has grown 2,5 times in the corporate world from 2017 to the end of 2022. But, there is still a long way to go, as investment in this discipline is expected to increase over the next three years, as well as the areas in which it is applied.

Communication has definitely been one of the industries most impacted by the arrival of this tool. Artificial Intelligence has been introduced in the way we receive, create and share information in our daily lives.

On one hand, its implementation in our industry helps improve the performance, efficiency and productivity of our processes. For example, it allows us to process high volumes of data to better understand our audiences and to make evidence-based decisions, as well as automating multimedia content creation.

However, it also involves some risks, such as communication distortion due to lack of information or bias, as well as the lack of traceability of the sources used. It also raises some ethical and legal dilemmas related to transparency in the use of this tool for the development of communication products; confidentiality and privacy of the data shared; and respect of copyright of the materials available on the web.

Nevertheless, the greatest risk is not understanding how to capitalize on the opportunities the tool offers if we are not able to adapt to its evolution quickly enough.

Therefore, the big question to pose is how to take advantage of its benefits in a proper and safe way, generating value for the business and stakeholders, and encouraging innovation to be at the forefront of our sectors.

As a principle, the most important thing is to

analyze the risks as well as the ethical and legal implications of its use, review the most appropriate platform depending on the need and core of the company, and select very well the information we show. In the case of communication companies, it is also essential to be open and transparent with the information shared.

So, regardless of the business profile, it is key to recognize that AI supports and complements the skills of our people, but it does not replace them. Human talent must guide artificial intelligence to achieve effective and genuine communication. Without our cognitive abilities, judgment and prioritization, AI-generated content will be empty and will not allow the brand to connect with people. This is why it is important to train talent and provide them an environment of trust and safety to learn, even from mistakes, and to use this as a catalyst of their own ideas, rather than as a substitute for personal inventiveness.

Finally, it is important to recognize that -like any other tool- it is not perfect and is constantly evolving. So, we must remain attentive to the changes in the discipline to benefit as much as possible from it.)))



¿Es posible suplir un requisito de forma de nuestro ordenamiento civil adjetivo con alguna de las fuentes del derecho como lo es la Ley del Silencio Administrativo Positivo?

Sabido es que nuestros operadores jurisdiccionales son excesivamente rigurosos en cuanto a cuestiones de forma se trata, dejando con frecuencia de lado la finalidad concreta del proceso, cual es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre con relevancia jurídica.

Así las cosas, el motivo de este artículo es abrir tribunas entre los lectores para el debate de un tema muy puntual: ¿Es posible aplicar supletoriamente alguna de las fuentes del derecho para suplir requisitos de forma establecidos en nuestro Código Procesal Civil?

Partamos por citar las fuentes del derecho

peruano: i) la Constitución, ii) la ley, iii) la jurisprudencia, iv) la costumbre, v) los principios generales del derecho; por lo que, en estricto, cuando nos referimos a las fuentes del derecho, podríamos estar hablando de la Ley del Silencio Administrativo Positivo – Ley 29060, o cualquier otra norma del sistema jurídico peruano.

En este orden de ideas, para el presente ejercicio nos permitimos traer a colación la Ley del Silencio Administrativo Positivo, la cual establece que los procedimientos administrativos se consideran automáticamente aprobados ante la inercia de la administración con el solo transcurrir del plazo máximo establecido para tal procedimiento; dando así origen a la aprobación ficta.



Ahora bien, en un hipotético caso en el que X acuda al órgano jurisdiccional en busca de tutela efectiva para demandar prescripción adquisitiva de dominio respecto de un bien que mantiene en posesión desde 1980, en contra de la Municipalidad de Chaposanatiariato (propietario registral); previamente tendría que acudir ante dicha municipalidad a fin de solicitar la visación de planos que le permita cumplir con este requisito de forma contenida en el artículo 505 de nuestro ordenamiento procesal. Ahora bien, supongamos que la municipalidad se niega a atender la solicitud de visación de planos de X dejando transcurrir el tiempo sin dar respuesta alguna. ¿Podrá X invocar una visación ficta de planos que le permita cumplir con este requisito establecido en la norma antes acotada y acceder al contradictorio? ¿Podrá el a quo tener por cumplido el requisito de visación de planos contenido en el artículo 505, dando por válida la aprobación ficta invocada por X, más aún cuando en el desarrollo del iter se podrían actuar medios probatorios orientados a validar la información proporcionada por X con la visación ficta?

En nuestra opinión, atendiendo a la razón de ser de la aprobación ficta y del silencio administrativo positivo es perfectamente posible realizar el ejercicio antes esbozado, máxime si la finalidad del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre; abundando en razones, el a quo tendría expedito el camino de

la integración de la norma procesal, que ante vacíos o defectos en las disposiciones del código procesal civil y atendiendo a las circunstancias del caso, puede y debe recurrir a los principios generales del derecho procesal, la doctrina y la jurisprudencia.))



CHRISTIAN CORNEJO SALDAÑA

Socio especialista en litigios y controversias, sede de Trujillo

Partner, litigation and dispute resolution expert - Trujillo office
 chcomejo@munizlaw.com

Is it possible to replace a form requirement of our procedural civil law with one of the sources of law such as Positive Administrative Silence?

It is well known that our jurisdictional operators are extremely rigorous when it comes to form requirements. They often leave aside the specific purpose of the process, which is to resolve a conflict of interest or eliminate an uncertainty of legal relevance.

Therefore, the purpose of this article is to open a forum among readers for the discussion of a very specific topic: Is it possible to supplementarily apply any of the sources of law to replace the form requirement established in our Code of Civil Procedure?

Let us start by citing the sources of Peruvian law: i) the Constitution, ii) the law, iii) jurisprudence, iv) tradition, v) the general principles of law. For this, strictly speaking, when we mention the sources of law, we could be talking about the Administrative Silence Act - Act 29060, or any other rule of the Peruvian legal system.

Following this line of thought, for this exercise we would like to bring up the Positive Administrative Silence Act, which sets out that administrative procedures are deemed automatically approved faced with the inertia of the administration, merely by the elapse of the maximum term set out for said procedure; this leads to an automatic approval.

Now, in a hypothetical case in which X goes to the court to ask for effective protection and sue the Municipality of Chaposanatariato (registered owner) for adverse possession of a property it keeps in its possession since 1980, they would have previously gone to said municipality and request the approval of the drawings to meet this form requirement provided in article 505 of our procedural law. Now, let us suppose the Municipality refuses to address X's request for approval of the drawings, letting time elapse without giving an answer at all. Will X be entitled to invoke the approval by default of the drawings so as to meet this requirement provided in the aforementioned rule and gain access to the adversarial proceedings? Could the *a quo deem* the requirement of approval of the drawings provided in article 505 met, thus validating

the approval by default invoked by X, particularly when evidence validating the information provided by X with the approval by default could be exhibited in the development of the due process?

In our opinion, taking into account the rationale for the approval by default and the positive administrative silence, it is absolutely possible to do the exercise outlined above, especially if the purpose of the proceedings is to resolve a conflict of interest or eliminate an uncertainty. Furthermore, the *a quo* would have the way cleared to integrate the procedural rule, which in the event of loops or error in the provisions of the civil procedural code and considering the circumstances, can and should pursue the case to the general principles of procedural law, doctrine and jurisprudence.)))

Beneficios tributarios para la investigación, desarrollo e innovación

Parte de toda economía desarrollada es el valor agregado que la industria le puede otorgar a las materias primas o procesos productivos. Este valor agregado se debe en buena parte a la inversión que se realiza en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) sea desde el Estado, la empresa privada o las propias universidades. Esta triple hélice asegura que el sector pueda mantenerse competitivo en una economía tan dinámica como la actual. Por ello, surge la pregunta para conocer cuáles son los avances en nuestro país, y especialmente cómo el Estado peruano se encarga de fomentar la I+D+i.

Con fecha 13 de marzo de 2015, se promulgó la Ley n.º 30309, diseñada especialmente para promover la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológicos, mediante el beneficio tributario aplicable a los gastos en proyectos de investigación científica en el país. Este beneficio temporal ha sido extendido con la promulgación de la Ley n.º 31659 hasta el 31 de diciembre del 2025.

Antes de la promulgación de esta norma, el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta recogía ya la posibilidad que cualquier empresa pueda deducir la totalidad de sus gastos en investigación científica para fines de impuesto a la renta. La condición era respetar el principio general de causalidad e inicialmente se permitía deducir solo aquellas investigaciones vinculadas al giro del negocio, pero posteriormente se permitió que no necesariamente deban estar vinculadas para brindar mayor flexibilidad.

Ahora bien, si la Ley de Impuesto a la Renta ya reconocía estos gastos como deducibles, la Ley n.º 30309 introduce la novedad que se pudieran deducir un porcentaje adicional de ese gasto. Inicialmente, se permitió deducir hasta el 175 % del gasto si estos proyectos se realizaban en centros domiciliados en el país y para el caso de los no domiciliados este porcentaje descendía a 150 %.

Con la promulgación de la Ley n.º 31659 este beneficio se ha incrementado. La deducibilidad es del 240 % si el proyecto es realizado directamente por el contribuyente o mediante centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica domiciliados en el país; y de 190 % si la investigación es realizada por centros no domiciliados en el país.

Por otro lado, los contribuyentes, cuyos ingresos netos superen 2 300 UIT, podrán beneficiarse de hasta un 190 % si el proyecto es realizado directamente por el contribuyente o mediante centros domiciliados en el país, y asciende a 160 % si la investigación es realizada por centros no domiciliados en el país.

No debemos dejar de tomar en cuenta que el reglamento publicado mediante Decreto Supremo n.º 188-2015-EF establece las condiciones y el detalle específico para acceder a este beneficio, así como enmarca el rol del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica durante este proceso, en su calidad de órgano rector y encargado de dirigir, fomentar, coordinar,



supervisar y evaluar las acciones de Estado en todo el país en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica.

En términos sencillos, las deducciones de una empresa son gastos que la ley tributaria reconoce a las empresas a fin de poder reducir los resultados del ejercicio, teniendo como consecuencia el menor pago de impuestos al final del ejercicio fiscal. Por lo tanto, este beneficio tributario podría servir para seguir impulsando una reforma necesaria como es el fomento de la investigación en el país con la finalidad de aumentar la especialización y mantener competitivo al sector empresarial peruano y con miras a dejar de lado la dependencia de la exportación de materias primas para el crecimiento de la economía.))



ANDRÉS DELGADO CÁCERES

Asociado senior, especialista en derecho tributario, sede Arequipa

Senior associate, tax law expert - Arequipa office

adelgadoc@munizlaw.com

Tax benefits for research, development and innovation

A part of every developed economy is the value added that the industry may grant to raw materials or productive processes. This value added is, to a great extent, due to investments made on research, development and innovation (R+D+i), whether they come from the State, the private industry or the universities themselves. This triple helix guarantees the industry remains competitive in a dynamic economy like the current one. For this, a question arises in regards to the improvements in our country, especially regarding how the Peruvian State promotes R+D+i.

On March 13, 2015, Act No. 30309 was enacted and especially designed to promote scientific research, development and technological innovation through tax benefits applicable to expenses on scientific research projects in the country. This temporary benefit has been extended by the enactment of Act No. 31659 until December 31, 2025.

Prior to the enactment of this act, Article 37 of the Income Tax Act already covered the possibility that any company may deduct their total expenses on scientific research for income tax purposes. This was conditioned to respect the general principal of causality and initially only allowed the deduction for research associated with the course of business, but it further allowed the inclusion of unrelated research to provide more flexibility.

That being said, if the Income Tax Act already acknowledged these expenses as deductible, Act No. 30309 introduces the possibility of enabling the deduction of an additional percentage from that expense. Initially, it allowed a deduction of up to 175% of the expenses if the projects were made in centers located within the country, and this percentage lowered to 150% if they were located overseas.

This benefit has increased since Act No. 31659 was enacted. Deductibility is 240% if the project is made directly by the taxpayer or through scientific research, technological development or technological innovation centers located within the country; and 190% if the research was made in overseas centers.

Conversely, taxpayers whose net income exceed 2300 Tax Units, could benefit from up to 190% if the project is made directly by the taxpayer or through centers located within the country, and 160% if the research is made by overseas centers.

We should take into consideration that the regulations published by Supreme Decree No. 188-2015-EF sets out the conditions and specific details to gain access to this benefit, as well as framing the role of the National Council of Science, Technology and Technological Innovation (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica) during this process, in its capacity as governing body in charge of the direction, promotion, coordination, supervision, and evaluation of the State's actions all over the country in terms of science, technology and technological innovation.

In plain terms, a company's deductions are expenses that the Tax Law acknowledges in order to reduce the results of the fiscal year, consequently paying less taxes by the end of the fiscal year. Therefore, this tax benefit could help to keep fostering a necessary reform such as the promotion of research within the country with the purpose of increasing specialization, and maintain a competitive Peruvian business industry, as well as aiming to stop dependency on raw materials for our economic growth.)))



La responsabilidad objetiva en los actos de infracción a los derechos de propiedad industrial

Mediante un pronunciamiento emitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)¹ se determinaron los alcances que deben ser tomados en consideración ante un hecho de importación de productos identificados con una marca registrada, respecto de la cual el importador no contaba con autorización de uso por parte de su titular.

En el caso materia de revisión por el TJUE una persona natural importó productos identificados con una marca debidamente registrada a favor de un tercero. Posteriormente, el producto fue almacenado y exportado por requerimiento de una nueva empresa. La remuneración recibida por la importación de los productos fue un cartón de cigarrillos y una botella de coñac.

La fiscalía, con participación de la empresa titular de la marca, denunció el hecho ante el Tribunal de

Primera Instancia de Helsinki, el cual resolvió que no había podido acreditarse que el importador hubiese cometido un delito doloso. No obstante, le prohibió proseguir con dichos actos y le impuso una indemnización en favor de la empresa titular de la marca registrada.

La importadora impugnó la condena ante el Tribunal de Apelación de Helsinki. Dicho tribunal determinó que el importador no había pretendido obtener un fin de lucro y que la retribución percibida con tal motivo no se basaba en la explotación económica de mercancías; era la contrapartida del depósito de mercancías por cuenta de un tercero. En ese orden de ideas el Tribunal declaró infundada la pretensión de indemnización formulada por la empresa titular de la marca registrada.

La sentencia antes mencionada fue materia de impugnación ante el Tribunal Supremo y es este

¹ Sentencia C-772/18

tribunal quien decide solicitar la interpretación prejudicial al TJUE.

El TJUE, en la sentencia materia de análisis, definió lo siguiente:

- Realizar ciertas actividades para llevar a cabo la importación, tales como señalar su dirección, encargar o realizar el despacho de la mercancía ante el agente de aduanas sugiere que dicha persona es el importador de los productos.
- El hecho de que una persona haya importado y despachado productos basta para declarar que ha actuado en el tráfico económico, sin que sea necesario analizar el tratamiento posterior de dichos productos.
- Es irrelevante cuantificar o analizar la naturaleza de retribución percibida por el importador como contrapartida a su actividad.

En virtud de lo establecido en la sentencia del TJUE, es importante que señalemos que lo analizado por dicho tribunal, en un caso con características bastante particulares, son supuestos que en la legislación peruana no serían revisados debido a que en nuestra normativa la responsabilidad es objetiva. En efecto, el artículo 97 del Decreto Legislativo n.º 1075 contempla de manera expresa que la responsabilidad administrativa derivada de los actos de infracción a los derechos de propiedad industrial es objetiva.

En otras palabras, Indecopi no revisaría ante una presunta infracción marcaría si el infractor tenía ánimo de lucro, si la importación está realizada para entregar dichos productos a un tercero o si los mismos van a ser exportados, toda vez que en nuestra legislación la infracción se configura cuando se produce el uso de una marca registrada sin contar con la autorización de su titular.

Cabe indicar que, en nuestra normatividad, aun cuando no se hayan comercializado los productos materia de denuncia en el territorio nacional, de verificarse que la denunciada fabricó o importó productos identificados con signos sin contar con autorización para ello, constituye un acto que atenta contra sus derechos de propiedad industrial.

Por lo tanto, considero que si trasladamos los hechos que concurrieron en el caso analizado a nuestra

normatividad, el Indecopi únicamente hubiese tenido que analizar si el importador contaba con las licencias y autorizaciones correspondientes para poder utilizar el signo distintivo en los productos importados y si en caso no se contase con dichos documentos, directamente se tendría que analizar los posibles agravantes y las diferentes situaciones que podrían haberse generado para determinar la sanción para el importador.

En ese sentido, es claro que nuestra normatividad tiene criterios muy claros y precisos para determinar las sanciones en casos de uso no autorizado de un signo distintivo, ya sea que se fabriquen por terceros ajenos al titular del signo o por importadores que buscan ingresar productos al mercado peruano y así generar una afectación directa a los titulares de los signos.)))



MELISSA COSTA ESPEJO

Asociada senior, especialista en propiedad intelectual

Senior associate, intellectual property expert

lmcosta@munizlaw.com

Strict liability in industrial property rights infringement

Through a decision made by the Court of Justice of the European Union (CJEU), the scope was determined for the case of an import of products identified with a registered trademark for which the importer lacked authorized usage from the owner.

In the case reviewed by the CJEU, an individual imported products identified with a duly registered trademark in favor of a third party. Afterwards, the product was stored and exported by request of a new company. The payment received for the importation of said products was a cigarette box and a bottle of cognac.

The Prosecutor's Office, in cooperation with the company owner of the trademark, reported the issue before the Court of First Instance of Helsinki, which settled that it was not possible to prove the importer committed an intentional offense. However, he was prohibited from continuing with such actions and was imposed a compensation in favor of the company owner of the registered trademark.

The importer challenged the judgment before the Helsinki Court of Appeals. Said Court determined that the importer did not intend to gain profits and the payment received for such action was not based on the economic exploitation of merchandise; it was the counterpart of the merchandise storage on the account of the third party. On that order of ideas, the Court dismissed the complaint for compensation made by the company owner of the registered trademark.

The aforementioned judgment was challenged before the Supreme Court and said court decided to request the preliminary ruling to the CJEU.

The CJUE, in the judgment subject to analysis, defined the following:

- Doing certain activities to carry out the importation, such as indicating their direction, assign or do the merchandise clearance before the customs agent suggests that such person is the importer of the products.
- The fact that somebody have imported and did the clearance of products is enough to rule out they have acted in commercial trade, and there is no need to analyze the subsequent treatment of said products.

- It is irrelevant to quantify or analyze the nature of the payment received by the importer as a counterpart to their activities.

Pursuant to the provisions in the judgment by the CJUE, it is worth pointing out that what said court analyzed, in a case with very specific characteristics, are events which the Peruvian legislation would not review because our regulations deem liability is strict. In fact, Article 97 of Legislative Decree No. 1075 expressly states that administrative liability derived from industrial property right infractions is strict.

In other words, Indecopi would not review an alleged trademark infringement if the offender acted for-profit, if the import was made to deliver the products to a third party or if the aforementioned products were to be exported; since our legislation determines that an infringement is committed when a registered trademark is used without the authorization of its owner.

It is worth noting that, according to our regulations, even though the products subject to report were not sold in the national territory, if the suspect is proved to have manufactured or imported products identified with signs without authorization, they are committing an action against industrial property rights.

Therefore, in my opinion, if we transfer the actions that converged in the analyzed case to our regulations, Indecopi would have only considered if the importer had the corresponding licenses and authorizations to use the distinctive sign in the imported products and, should they lacked those documents, the analysis would have directly focused on the possible offenders and the different possible situations that may have arisen in order to determine a sanction for the importer.

In this regard, it is evident that our regulations have very clear and precise criteria to determine sanctions in cases of unauthorized use of a distinctive sign, either if the products were manufactured by a third party uninvolved with the sign owner or by importers aiming to bring products into the Peruvian market and directly affect the sign owners.))

¹ Judgment C-772/18.

EL CONTRATO DE ADVERGAMING COMO ESTRATEGIA COMERCIAL DE VENTA EN LA ERA TECNOLÓGICA

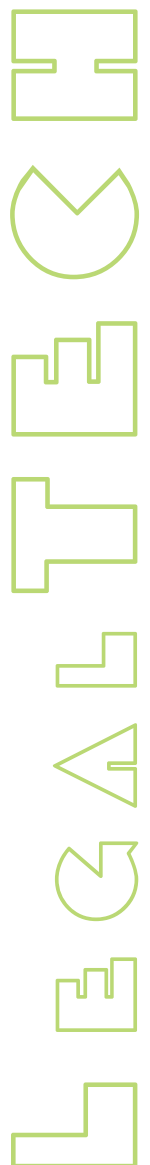


Los contratos son y serán parte de nuestra vida diaria, puesto que se encuentran directamente vinculados con las relaciones cotidianas de las personas, permitiéndonos pactar toda clase de actos jurídicos, sean estos de índole civil, laboral, mercantil, etc. No obstante, al estar el derecho en constante cambio, la realidad social ha generado que muchas de estas actividades no se enmarquen dentro de los contratos típicos, y, por lo tanto, carecen de una regulación normativa específica. Es por ello que han surgido los denominados contratos modernos, tales como el *know how*, *factoring*, *franchising*, *joint venture*, *management*, *hosting*, *advergaming*, entre otros; los cuales, si bien no se encuentran regulados, gozan de plena aceptación jurídica. Bajo ese contexto, procederemos a explicar el surgimiento de uno de estos contratos atípicos o llamados también innominados.

Una de las actividades más antiguas que existe en la sociedad es sin duda alguna la actividad comercial o mercantil, la cual, con el paso del tiempo, se ha mantenido en constante evolución, siendo su fin principal la colocación de mercancía a través de un proceso de compra y venta de bienes y servicios. Es a raíz del avance tecnológico que el ser humano ha tenido que adecuar sus actividades, siendo imprescindible la utilización de los medios tecnológicos, no solo para realizar cosas tan sencillas como ver la hora o revisar el calendario, sino para realizar operaciones más complejas como comprar y vender bienes y servicios. Ello ha traído grandes beneficios, pero acarrea también implicancias jurídicas.

Normalmente, los comerciantes optan por publicitar sus productos a través de la radio, la televisión e internet. Sin embargo, con el pasar de los años y el avance de la tecnología, se ha creído conveniente buscar estrategias innovadoras que permitan involucrar al usuario con el producto que se está ofertando, de tal manera que la publicidad lanzada al mercado ya no sea más que una mera información de la marca o producto, sino una nueva forma por la cual el usuario experimente de modo práctico lo que se está publicitando. Y que mejor manera de hacerlo que a través de los videojuegos, los cuales van a permitir al usuario interactuar de manera directa con la marca o producto ofertado. Es así como nace una nueva modalidad contractual denominada *advergaming*.

El *advergaming* es un contrato mercantil por el cual una parte llamada 'anunciante' encomienda a otra parte llamada 'programador' la creación de videojuegos para una marca determinada; ello con la finalidad de promocionar no solo la marca, sino también productos, servicios o actividades, pero de una manera lúdica.



EFECTOS DE LA ACTIVIDAD DE VIDEOJUEGOS

Este tipo de contrato se encuentra dentro de las categorías de contratos atípicos o innominados; ello en razón a que dicha figura no ha sido recogida por el legislador, es decir, carece de una regulación especial, por lo que sus elementos se encuentran regulados por las propias prácticas comerciales. Este tipo de prácticas han permitido que en la actualidad se desarrollen dos modalidades de contratos relacionados al *advergaming*. Por un lado, un contrato de *in-game advertising* y, por otro lado, un contrato de *advergaming* en sentido estricto, lo cual ha generado en muchos casos confusión. La diferencia entre estos dos tipos de contratos radica en que a través del contrato *in-game advertising*, el anunciante contrata al programador del videojuego a efectos de que este pueda integrar en su creación la marca o el producto del anunciante, de tal forma que este forme parte del escenario del videojuego; mientras que en el contrato de *advergaming*, el anunciante encomienda al programador la creación de videojuegos para una marca determinada; ello con la intención de que exista una interacción lúdica entre la marca o producto y el usuario.

No cabe duda de que, si bien los videojuegos en un primer momento estaban dirigidos para niños preadolescentes, estos pasaron a convertirse en una moda para gente de todas las edades. Ello en razón a que existe una gran oportunidad para publicitar marcas o productos y así incrementar las ventas. Actualmente, los videojuegos se sitúan como la primera actividad de ocio a nivel internacional y han acabado por posicionarse por encima de las industrias más rentables como el cine y la música.

Las grandes ventajas que ofrece la industria de los videojuegos, junto con la posibilidad de adentrarse en un mundo de interacción virtual por parte del consumidor, ha generado que los anunciantes empiecen a poner mayor atención a este sector como medio de contratación mercantil, puesto que es a través de estos que el anunciante logra tener una comunicación directa con el usuario y capta potenciales clientes respecto a la marca o producto que ha sido ofertado en el mercado.)))



ANTHONY BRINGAS ANGULO
 Abogado, sede Trujillo
 Lawyer, Trujillo office
 abringas@munizlaw.com

The Advergaming contract as a commercial sales strategy in the technological era

Contracts are and will always be part of our daily lives, since they are directly linked with the daily relationships of people, allowing us to hold all kinds of legal acts, whether of civil, labor, business nature, etc. However, as law is constantly changing, the social reality has caused many of these activities to lack a framework within typical contracts and, thus, they lack specific regulations. For this, the so called modern contracts have emerged, such as know how, factoring, franchising, joint venture, management, hosting, advergaming, among others. Although they are not formally regulated, they are legally valid. In this context, we will explain the appearance of one of these atypical or innominate contracts.

One of the oldest activities in society is, definitely, commercial or trade activity, which has been in constant evolution throughout time, with the main purpose of placing goods through the sale and purchase of goods and services. Because of technological progress, humans had to adapt their activities, and the use of technological resources has been fundamental not only for simple tasks such as checking the time or viewing the calendar, but also to carry out more complex operations such as selling and purchasing goods and services. That has provided great benefits, but it also carries legal implications with it.

Usually, traders advertise their products through the radio, television or the internet. However, over the years and with the technological progress, it seemed appropriate to search for innovative strategies that allow the user to be involved with the offered product, so that advertisements released to the market are not just mere brand or product information, but a new way in which the user has a practical experience of what is being advertised. And the best way to do so is through videogames, which allow the user to directly interact with the offered product or brand. This is how the new modality called advergaming was born.

Advergaming is a commercial contract in which a party called the "advertiser" entrusts another party called the "programmer" with the creation of videogames for a specific brand, with the purpose of not only promote the brand, but also the products, services and activities, but on a playful manner.

This type of contract is within the category of atypical or innominate contracts, because this legal concept has not been ruled by the legislative branch, i.e., it lacks specific regulations; therefore, its elements are governed by commercial practices. This type of practices have allowed the current development of two contract modalities related to advergaming. On one hand, an in-game advertising contract and, on the other hand, a strict advergaming contract. This has caused confusion in many occasions. The difference between these two types of contracts is as follows: in the in-game advertising contracts, the advertiser hires the game programmer to integrate the advertiser's brand or product in the creation of the latter, so that it is part of the videogame setting; meanwhile, in the advergaming contract, the advertiser entrusts the programmer with the creation of a videogame for a specific brand with the intention of producing a playful interaction between the brand or product and the user.

There is no doubt that, although videogames were initially aimed at pre-teenager children, they have become a trend for people of all ages. This is because of the great opportunities to advertise brands or products, thus increasing sales. Nowadays, videogames are the first leisure activity worldwide, and have positioned above more profitable industries such as the film and music industry.

The great advantages offered by the videogame industry along with the possibility for the consumer to delve into a world of virtual interaction have caused advertisers to focus more in this sector as a means of commercial agreement. Because of videogames, advertisers can achieve direct communication with the user and attract potential customers for the brand or product offered in the market.))

MODIFICAN LEY QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Alerta Legal Compliance

I. Introducción.

El 13 de mayo se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley n.º 31740, “Ley que modifica la Ley 30424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, para fortalecer la normativa anticorrupción referidas a las personas jurídicas y promover el buen gobierno corporativo”. Dicha Ley, promulgada por el presidente del Congreso de la República, tras un dictamen de aprobación vía insistencia y su posterior aprobación en el Pleno, trajo consigo modificaciones e incorporaciones relevantes a la Ley n.º 30424, reformas que responden en parte a la intención del legislador por aceptar algunas de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

II. Aspectos relevantes.

I. Modificación del nomen iuris de la Ley n.º 30424

La Ley n.º 30424 pasó a denominarse “Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal”. Con ello, se advierte que el legislador sigue considerando, pese al fraude de etiquetas, que la naturaleza de la responsabilidad de la persona jurídica es administrativa y no penal.

2. Ampliación del catálogo de delitos por los que las personas jurídicas pueden ser responsable

Se ampliaron los delitos por los que las personas jurídicas pueden resultar responsables. Además de los siete delitos ya previstos originalmente, a saber, cohecho activo genérico, cohecho activo específico, cohecho activo transnacional, colusión, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se adicionaron los siguientes:

Norma	Artículo	Delito
Código Penal	199	Contabilidad paralela
Código Penal	226	Atentado contra monumentos arqueológicos
Código Penal	228	Extracción ilegal de bienes culturales
Decreto Legislativo 1106	5	Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas
Decreto Legislativo 1106	6	Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información
Ley 28008	1	Contrabando
Ley 28008	2	Modalidades de contrabando (derogado)
Ley 28008	3	Contrabando fraccionado
Ley 28008	4	Defraudación de rentas de aduanas
Ley 28008	5	Modalidades de Defraudación de rentas de aduanas (derogado)
Ley 28008	6	Receptación aduanera
Ley 28008	7	Financiamiento
Ley 28008	8	Tráfico de mercancías prohibidas o restringidas
Ley 28008	10	Circunstancias agravantes



Decreto Legislativo 813	1	Defraudación tributaria
Decreto Legislativo 813	2	Otras modalidades de Defraudación tributaria
Decreto Legislativo 813	4	Circunstancias agravantes
Decreto Legislativo 813	5	Incumplimiento de llevar libros y registros contables
Decreto Legislativo 813	5-A	Proporcionar información falsa con ocasión de la inscripción o modificación de RUC para obtener autorización de impresión de comprobantes y otros
Decreto Legislativo 813	5-B	Almacenamiento de bienes en lugares no declarados como domicilio fiscal o establecimiento anexo
Decreto Legislativo 813	5-C	Confeción, obtención o venta de comprobantes de pagos u otros para cometer delitos tributarios
Decreto Legislativo 813	5-D	Circunstancias agravantes
Decreto Ley 25475	2	Terrorismo
Decreto Ley 25475	3	Circunstancias agravantes
Decreto Ley 25475	4	Colaboración con el Terrorismo
Decreto Ley 25475	5	Afiliación a organizaciones terroristas
Decreto Ley 25475	6	Instigación al terrorismo
Decreto Ley 25475	6-A	Reclutamiento de personas
Decreto Ley 25475	6-B	Conspiración para el delito de terrorismo
Decreto Ley 25475	8	Obstaculización de acción de la justicia

3. Precisión sobre el título de intervención delictiva de los sujetos apicales.

Se precisa que los socios, directores, administradores de hecho o derecho, representantes legales o apoderados de la persona jurídica, o de sus filiales o subsidiarias, pueden contagiar de responsabilidad a la persona jurídica, en la medida en que hayan cometido algún delito previsto en el artículo 1 de la Ley n.º 30424, bajo cualquiera de las modalidades de autoría y participación previstas en el Código Penal.

4. Criterios para el cálculo de la medida administrativa de multa.

Se establecieron dos supuestos de cálculo de la multa. Así, cuando se pueda determinar el monto del beneficio obtenido o que se esperaba obtener con la comisión del delito, la multa será no menor al doble ni mayor al séxtuplo de dicho monto. En cambio, cuando no se pueda determinar el precitado monto, la multa será no menor de diez ni mayor de diez mil unidades impositivas tributarias.

Para la determinación de la multa, el juez penal debe valorar, entre otros, los siguientes criterios:

1. El incumplimiento de reglas y procedimientos internos.
2. La cantidad y jerarquía de los funcionarios, empleados y colaboradores involucrados en el delito.
3. La omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes.
4. La extensión del daño causado.
5. El monto de dinero involucrado en la comisión del delito.
6. El tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica.
7. La denuncia espontánea a las autoridades por parte de la persona jurídica como consecuencia de una actividad propia de detección o investigación interna.

5. Eximente de responsabilidad y circunstancias atenuantes.

Se reubicó sistemáticamente la eximente por contar con un modelo de prevención eficaz en el artículo 12º de la Ley n.º 30424. Asimismo, se dispuso que tal eximente resultará inaplicable cuando el delito es cometido por algún sujeto apical, a saber, socios, directores, administradores de hecho o derecho, representantes legales o apoderados, o sujetos con capacidad de control de la persona jurídica.

6. Modelo de Prevención de Delitos.

Se modificaron los elementos mínimos del modelo de prevención, sustituyéndose la "Identificación, evaluación y mitigación de riesgos" de la organización, por la



implementación de “acciones de mitigación de los riesgos”.

7. Modificación de la naturaleza jurídica del informe técnico de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Sigue constituyendo requisito obligatorio que el fiscal, para formalizar la investigación preparatoria, cuente con un informe técnico de la SMV que se pronuncie sobre la implementación y funcionamiento del modelo de prevención de la persona jurídica que previamente haya alegado tenerlo. No obstante, las conclusiones de tal informe perdieron vinculatoriedad, toda vez que ahora constituyen tan solo un elemento de valoración adicional a considerar por el Ministerio Público.

8. Aspectos relevantes sobre las facultades de la SMV y la valoración del informe técnico.

Se han incorporado los artículos 19, 20, 21 y 22 a la Ley n.º 30424. El artículo 19 se refiere a la ya comentada valoración del informe técnico de la SMV, tanto por parte del Juez como del fiscal. Así, el informe técnico deja de tener un especial peso para acreditar la eficacia o ineficacia del modelo de prevención de delitos.

Seguidamente, el artículo 20 regula específicamente la garantía de confidencialidad de la información y documentación proporcionada por la persona jurídica a la SMV para acreditar la implementación y funcionamiento de su modelo de prevención.

El artículo 21 establece las facultades de la SMV en el marco de la evacuación del informe técnico. Por último, el artículo 22 establece la posibilidad de intercambio de información relacionada al modelo de prevención y SPLAFT entre la SMV y la UIF cuando el delito imputado a la persona natural sea lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

9. Vigencia.

Todas las modificaciones se encuentran actualmente vigentes, salvo las modificaciones al artículo 1 de la Ley n.º 30424, así como la derogación de las consecuencias accesorias previstas en la Ley de los Delitos Aduaneros y la ley penal tributaria. Estos dos extremos de la ley entrarán en vigencia a partir del 13 de noviembre.

10. Derogación de las consecuencias accesorias previstas en la Ley de delitos aduaneros y la Ley Penal Tributaria.

A efectos de evitar duplicidad en las consecuencias jurídicas para la persona jurídica por la comisión de delitos aduaneros o tributarios en su esfera de organización, se ha dispuesto la derogación de los artículos 11º y 17º de la Ley de los Delitos Aduaneros (Ley n.º 28008) y Ley Penal Tributaria (Decreto Legislativo n.º 813), respectivamente.

Con dicha derogación, queda claro que, por la comisión de delitos tributarios y aduaneros, a la persona jurídica solo le es aplicable las medidas administrativas previstas en el artículo 5 de la Ley n.º 30424. ¶





AMENDMENT OF THE ACT ON ADMINISTRATIVE LIABILITY OF ENTITIES

Alerta Legal Compliance

I. Introduction

On May 13, Act No. 31740, “Law amending Act 30424, on administrative liability of legal entities, to strengthen anti-corruption regulations regarding legal entities and promote good corporate governance” was published in *El Peruano Official Journal*. This Act, enacted by the President of the Congress of the Republic, after an opinion of approval via insistence and its subsequent approval in the Plenary Session, brought relevant amendments and additions to Act No. 30424. These reforms partially respond to the legislator’s intention to accept some of the recommendations by the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

II. Relevant Aspects

1. Amendment of the nomen juris of Act No. 30424

Act No. 30424 received the new designation of “Act governing the administrative liability of legal entities in criminal actions”. Thus, it should be noted that the legislator still considers, despite the label fraud, that the nature of the legal entity’s liability is administrative and not criminal.

2. Extension of the catalogue of crimes attributable to legal entities

The crimes attributable to legal entities has been extended. Furthermore, out of the seven crimes already foreseen, namely, generic active bribery, specific active bribery, transnational active bribery, collusion, influence peddling, money laundering and financing of terrorism, the following offenses were added:

Act	Article	Crime
<i>Criminal Code</i>	199	<i>Parallel accounting</i>
<i>Criminal Code</i>	226	<i>Attack against archaeological monuments</i>
<i>Criminal Code</i>	228	<i>Illegal removal of cultural property</i>
<i>Legislative Decree 1106</i>	5	<i>Failure in operations communications or suspicious transactions</i>
<i>Legislative Decree 1106</i>	6	<i>Refusal, delay and misrepresentation to provide information</i>
<i>Act 28008</i>	1	<i>Smuggling</i>
<i>Act 28008</i>	2	<i>Forms of smuggling (revoked)</i>
<i>Act 28008</i>	3	<i>Fractionated smuggling</i>
<i>Act 28008</i>	4	<i>Custom revenues fraud</i>
<i>Act 28008</i>	5	<i>Forms of custom revenues fraud</i>
<i>Act 28008</i>	6	<i>Custom concealment</i>
<i>Act 28008</i>	7	<i>Financing</i>
<i>Act 28008</i>	8	<i>Prohibited or restricted goods trafficking</i>
<i>Act 28008</i>	10	<i>Aggravating circumstances</i>

Legislative Decree 813	1	Tax fraud
Legislative Decree 813	2	Other forms of tax fraud
Legislative Decree 813	4	Aggravating circumstances
Legislative Decree 813	5	Failure to keep accounting books and recordkeeping
Legislative Decree 813	5-A	Provide false information to register or amending the Taxpayer Identification Number so as to get the authorization to print receipts and others
Legislative Decree 813	5-B	Storage of goods in undeclared facilities such as the registered office or annexed premises
Legislative Decree 813	5-C	Manufacturing, procurement or sale of payment receipts or others for tax crimes
Legislative Decree 813	5-D	Aggravating circumstances
Executive Order 25475	2	Terrorism
Executive Order 25475	3	Aggravating circumstances
Executive Order 25475	4	Cooperation with Terrorism
Executive Order 25475	5	Affiliation to a terrorist organization
Executive Order 25475	6	Incitement to terrorism
Executive Order 25475	6-A	Recruitment of individuals
Executive Order 25475	6-B	Conspiracy to commit terrorism
Executive Order 25475	8	Obstruction of justice

3. Specification on the criminal intervention title of individuals in high positions

It specifies that partners, directors, administrators by fact or by law, legal representatives or attorneys-in-fact of legal entities, or of their subsidiaries, can pass on the liability to the legal entity, to the extent that they have committed a crime in accordance to Article 1 of Act No. 30424, under any perpetration or participation modality in accordance to the Criminal Code.

4. Criteria for the estimation of the administrative measure of fine

Two assumptions were set out to estimate the fine. Thus, when determining the amount of profit obtained or expected to be obtained by committing a crime, the fine shall be no less than two times and no more than six times said amount. Meanwhile, when the aforementioned amount cannot be determined, the fine shall be no less than ten and no more than ten thousand tax units.

To determine the fine, the Criminal Judge must evaluate, among others, the following criteria:

1. The non-compliance of internal rules and procedures.
2. The amount and hierarchy of the officials, employees and collaborators involved in the crime.
3. The omission of supervision on the activities of the perpetrators and participants.
4. The extent of the damage caused.
5. The amount of money involved in the crime.
6. The size, nature and financial capacity of the legal entity.
7. The spontaneous complaint to the authorities by the legal entity as a consequence of their own detection activities or internal research.

5. Hold harmless recourse and mitigating circumstances

The recourse was systematically relocated since there was an effective prevention model in Article 12 of Act No. 30424. Likewise, such exemption was provided to be unenforceable if the crime is committed by individuals in high positions, namely, partners, directors, administrators de facto o de jure, legal representatives or attorneys-in-fact, or individuals with a level of control over the legal entity.

6. Crime Prevention Model

The minimum elements of the prevention model were modified, replacing the "Identification, evaluation and mitigation of risks" of the organization to the implementation of "risk mitigating actions".



7. Modification of the legal nature of the technical report of the Securities Market Regulator (SMV)

It remains a mandatory requirement for the prosecutor, in order to formalize the preliminary investigation, to have a SMV technical report to rule on the implementation and operation of the prevention model of the legal entity which previously alleged to have it. However, the conclusions of such report were not binding since they now constitute only an additional evaluation element to be taken into consideration by the Public Prosecutor's Office.

8. Relevant aspects on the SMV's powers and evaluation of the technical report

Articles 19, 20, 21 and 22 of Act No. 30424 were added. Article 19 refers to the already mentioned evaluation of the SMV technical report, both by the Judge and the prosecutor. Thus, the technical report is no longer of a particular importance to certify the efficiency or inefficiency of the crime prevention model.

Subsequently, Article 20 specifically regulates the confidentiality guarantee for the information and documentation provided by the legal entity to the SMV to credit the implementation and operation of their prevention model.

Article 21 establishes the powers of the SMV within the framework of the evaluation of the technical report. Finally, Article 22 establishes the possibility of information exchange regarding the prevention model and SPLAFT (Money Laundering and Terrorism Financing Prevention System, acronym in Spanish) between the SMV and UIF when the crime alleged to the individual is money laundering and terrorism financing.

9. Validity

All modifications are currently valid, except the modifications to Article 1 of Act No. 30424, as well as the repeal of the incidental consequences provided in the Customs Crime Act and the Tax Crime Act. These two legal points shall come into force on November 13.

10. Repeal of the incidental consequences provided in the Customs Crime Act and the Tax Crime Act.

For the purpose of avoiding overlapping legal consequences for the legal entity for committing customs or tax crimes in its organization sphere, Articles 11 and 17 of the Customs Crime Act (Act No. 28008) and Tax Crime Act (Legislative Decree No. 813), respectively, have been repealed.

With this repeal, it is clear that committing tax and custom crimes allows only to attribute the legal entity with the administrative measures provided in Article 5 of Act No. 30424.)))





EL EXPERTO



KARIN FERNÁNDEZ MUÑOZ

Socia senior especialista en derecho penal

Senior partner, criminal law expert

kfernandez@munizlaw.com

El no cobro de la cláusula penal en las contrataciones con el Estado como evidencia del perjuicio en el delito de colusión desleal agravada

En la tarea por demostrar que no siempre existe acto colusorio entre un funcionario público y un particular-empresario si el primero no llega a cobrar las penalidades establecidas en los contratos que suscriben, nos hemos topado con autoridades judiciales que interpretan de forma objetiva que este evento de por sí implica que estamos ante el delito de colusión desleal agravada regulado en el segundo párrafo del artículo 384 del Código Penal.

Como es sabido, el delito de colusión desleal agravado sanciona al funcionario público que defrauda y como consecuencia de tal defraudación se perjudica de modo efectivo al Estado peruano, es decir, es un delito de resultado pues se exige de un resultado concreto, de un daño, para imponer una sanción penal. Se debe resaltar que el perjuicio concreto en el patrimonio del Estado debe ser un desmedro real económico y no potencial. Únicamente el daño que provenga directamente del pacto colusorio entre el funcionario público y el sujeto privado deberá ser pasible de sanción penal bajo la figura del delito de colusión desleal agravada. En caso no exista este perjuicio, pero sí una serie de actos que conlleven



EL EXPERTO

Non-collection of the penalty clause in agreements with the State as evidence of damages in the crime of aggravated collusion by a government official

In the task of proving collusion is not always present in an action between a Government official and an individual/entrepreneur if the former does not collect the penalty fees set forth in the agreements they execute, we have come across judicial authorities who objectively interpret this event itself implies the crime of aggravated collusion governed by Paragraph 2 of Article 384 of the Criminal Code.

As we know, the crime of aggravated collusion sanctions a Government official who defrauds and, as a consequence of their action, the Peruvian State is effectively damaged. This is a result crime, since it requires a concrete result or damage to impose a criminal sanction. We must emphasize that the concrete damage against the State assets has to be a real economic prejudice and not a potential one. Only damages directly derived from the collusion act between a Government official and an individual will be liable of criminal sanction for the crime of aggravated collusion. In case there are no damages, but a series of actions leading to show an impartial conduct by the Government official making the agreement, this would be a crime of simple collusion, governed by Paragraph 1 of Article 384 of our Criminal Code.

On the other hand, the legal nature of the penalty clauses included in agreements with the State, governed by Article 1341 of the Civil Code, consider a compensation, since they are agreed before the execution of the agreement and before its performance. We must remember that these penalty clauses are those agreements adopted in the event of future breaches (even late performance) of the obligations within the agreement. In this regard, when one of the parties fails to comply an obligation, the other will proceed to collect the compensation amount agreed in the penalty clause. This sanction or compensatory payment is understood to arise from a breach of contract.

In this sense, criminal cases for aggravated collusion - where the damage to the State assets is required - cannot be considered as the compensation amount previously agreed upon in the penalty clause. While, on one hand, it is a requirement that the State assets are damaged with an economic prejudice, on the other hand, there is an expectation by the entity to collect an amount for a breach of an obligation. If this expectation is not met, there is no such thing as an "economic prejudice of the State property."

The legal doctrine states that economic prejudice to the State must occur as a direct consequence of the collusion act. For example, if the individual/entrepreneur delivers goods or provides services differing from the characteristics stated in the contractual basis, then the entity would not satisfy the user area that requested the acquisition said goods or services. In these cases, the entity would have spent its property in insufficient goods and services and, thus, it will make an expense in a new agreement. The State property has been affected by paying an individual/entrepreneur for a good or service which proves inadequate.

This would not happen if the payment of a penalty clause is not demanded anymore. In these cases, the entity had the expectation of collecting a previously agreed compensation amount for breach of contract, so its non-collection would not affect the State property. It is undeniable that this behavior could affect the agreement feasibility or even satisfying the need of the entity, but by no means can it be stated that it would affect the State property as is the requirement for the crime of aggravated collusion.

Thus, we believe this type of cases should be ruled out from the crime of aggravated collusion. And, in case of collusion in such situation, the non-collection of the penalty clause, then it could be a case of simple collusion, governed by Paragraph 1 of Article 384 of the Criminal Code.)))

De la posibilidad de accionar por responsabilidad civil, ante la existencia de daño causado, por el no reconocimiento de un hijo

Comencemos precisando que conforme a nuestra regulación en materia de filiación¹ son hijos extramatrimoniales los concebidos y nacidos fuera de matrimonio². Mencionado esto, en el caso de estos hijos de filiación no matrimonial se determina mediante el reconocimiento voluntario que puede darse de manera expresa –espontáneo o provocado– del padre o madre, o de ambos que efectúan sobre su hijo. En caso contrario, frente a la omisión del reconocimiento voluntario expreso del padre o madre o de ambos; la norma civil concede acciones de filiación que permiten, mediante un reconocimiento forzado, la determinación de la relación de paternidad respectivamente.

La cuestión es determinar si realmente el reconocimiento³ que efectúa el padre o madre es un acto voluntario o por el contrario es un deber,

y en este último caso si es moral o jurídico. De ser esto último toda persona tendría la obligación legal de reconocer a los hijos concebidos, precisando la oportunidad de cumplimiento de este deber. En ese sentido, podríamos determinar también las consecuencias jurídicas en caso de infracción del deber de reconocimiento; analizando en particular si puede aplicarse las normas de responsabilidad civil en caso de existir daño derivado de este incumplimiento.

Para intentar responder la pregunta mencionada, precisemos que el reconocimiento voluntario –cualquiera sea su forma– se caracteriza por ser un acto personal, desarrollado por la sola voluntad del padre o madre que debe reconocer. Por otro lado, el reconocimiento es forzado, cuando se produce mediante sentencia judicial recaída en

¹ Filiación: Vínculo a lazo que une a un hijo a su padre y a su madre.

² Código Civil Peruano, Art. 386. - Son hijos extramatrimoniales los concebidos y nacidos fuera del matrimonio.

³ Debemos precisar que el Reconocimiento, viene del vocablo reconocer, que entre los diversos significados que nos otorga la Real Academia Española se encuentra el de "distinguir o identificar algo o a alguien en virtud de determinados rasgos o características que le son propios" "conceder a alguien, con la conveniente solemnidad, la cualidad y relación de parentesco que tiene con el que ejecuta este reconocimiento y los derechos que son consiguientes".

un juicio de filiación. En ambos casos recordemos que el objetivo más allá de conocer quiénes son sus verdaderos progenitores, es que es al hijo a quien le interesa reconocerse y determinarse como individuo humano, singular y único; lo que en concreto es el derecho a su propia identidad, consagrado tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales.

Por tanto, el derecho a la identidad otorga legitimidad a todo individuo que quiera conocer su origen biológico, lo cual aterriza en el derecho de acceder a un procedimiento judicial –un juicio– para saber quiénes son sus padres y por consiguiente para tener una relación de padre o madre e hijo, que surge del vínculo biológico. Esta –verdad biológica– es tan importante para cada individuo, que la norma la ha considerado como un acto imprescriptible⁴ e irrenunciable, como es la otorgación de una condición de no caducidad de la acción.

El derecho a conocer la identidad de los progenitores es un derecho esencial que corresponde a toda persona; está intrínsecamente vinculado a la naturaleza humana y en consecuencia el ordenamiento jurídico debe proteger, facilitar y no impedir ni dificultar el ejercicio de este derecho. Su trascendencia y esencialidad para el hijo hace que se abandone el concepto de que debería ser un acto voluntario, para transformarse en un deber jurídico⁵.

En consecuencia, del reconocimiento del hijo se derivan importantes consecuencias jurídicas, como son el nombre y apellidos con el cual se identifica una persona desde su nacimiento y el ejercicio de deberes y derechos entre padre e hijo; siendo ambos fundamentales para el desarrollo de cualquier persona. Por tanto, estos aspectos tan importantes en la vida de toda persona no pueden estar supeditados al capricho del obligado a realizar el reconocimiento de un hijo, cuando a este (padre) se le ocurra o cuando un juez le ordene.

Considerando entonces que el reconocimiento de un hijo constituye un deber jurídico, resulta necesario determinar cuáles son sus consecuencias jurídicas, en caso de no hacerlo o hacerlo tardíamente. Por

tanto, nos preguntamos: ¿la falta de reconocimiento ha ocasionado daño al hijo, al haberse lesionado su derecho de identidad o de otros bienes patrimoniales o extrapatrimoniales? Si la respuesta es positiva; veamos si existe la posibilidad de poder ejercer acción judicial de responsabilidad civil a efecto de obtener una debida indemnización.

En nuestro ordenamiento civil peruano no existe ninguna disposición que prohíba la aplicación de las normas de responsabilidad civil al derecho de familia. Por lo tanto, desde el punto de vista normativo no tendríamos obstáculos para ello.

En suma, podríamos concluir que el derecho fundamental de toda persona de conocer su identidad biológica se materializa a través del derecho que tenemos todos a ser reconocidos por nuestros padres; en consecuencia, la obligación del progenitor debe ser cumplida desde que este conozca que es padre o madre del hijo. Asimismo, si ante este incumplimiento se producen daños se pueda aplicar las normas de la responsabilidad civil que obligue al pago de una reparación. En resumen, si este incumplimiento causa daño, debe ser indemnizado.)))

Artículo extraído de la revista Quorum de Arequipa.



NURIA DE AMAT CATACORA

Socia especialista en litigios y controversias, sede Arequipa
Partner, litigation and dispute resolution expert - Arequipa office
 ndamat@munizlaw.com

⁴ Código Civil Peruano, artículo 410, "No caduca la acción para que se declare la filiación extrapatrimonial".

⁵ VARGAS ARAVENA, David G. (2018) Del deber de reconocer a los hijos no matrimoniales y de la responsabilidad civil por su incumplimiento en el ordenamiento jurídico Chileno" para el Congreso Internacional del Derecho Civil Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca. Tirant lo Blanch, 2018.

On the possibility of bringing legal action for civil liability due to damage for refusing to acknowledge a child

We shall begin by clarifying that, pursuant to our regulations on filiation¹, children conceived and born outside marriage² are considered natural children. That being said, for natural children this is determined by the voluntary acknowledgement of the child. This may occur expressly - either spontaneous or provoked - by the father, the mother or both parents. Otherwise, upon failure of expressed, voluntary acknowledgement by the father, mother or both parents, civil regulations grant filiation procedures that allow determining parenthood through forced acknowledgement.

The issue is to determine if the acknowledgement³ by the father or mother is a really voluntary action or otherwise an obligation; and in the latter case, if it is a moral or legal obligation. In the case of the latter, all individuals would have the legal obligation to acknowledge their conceived children, specifying the opportunity when this obligation would be met. In this regard, the legal consequences in case of violation of the obligation to acknowledge could be determined; especially, analyzing if civil liability regulations are applicable in case of damages derived from this violation.

In an attempt to answer that question, let us specify that the voluntary acknowledgement -whatever its form- is a personal action carried out by the sole will of the acknowledging father or mother. Conversely, the acknowledgement is forced when it takes place through the final judgment obtained by a filiation proceeding. In both cases, let us remember that, besides knowing who their true progenitors are, the goal is the child's interest to acknowledge and determine themselves as a singular and unique human person; which is specifically the right to their own identity, set out in both our Constitution and international treaties.

Therefore, the right to identity grants legitimacy to every person who wants to know their biological origin, which is grounds for the right to access a legal procedure (a trial) to know who their parents are and, subsequently, have a father/mother-son relationship arising from the biological bond. This "biological truth" is so important for every person that the law has considered it as an imprescriptible⁴ and inalienable action, such as granting a non-expiration condition to the action.

The right to know the identity of the own parents is an essential right inherent to all individuals. It is intrinsically related to the human nature and, subsequently, the legal system must protect, facilitate and cooperate with the exercise of this right. It is such a transcendent and essential act for the child that the concept that it is a voluntary action turns into a legal duty⁵.

Accordingly, important legal consequences derive from child acknowledgement, such as the name and last names that identify a person from birth and the exercise of rights and duties between the father and the child. Both are essential in the development of any person. Therefore, these key aspects in the life of a person cannot depend on the whim of the person liable of acknowledging a child, whenever he (the father) wants to do so or when the judge mandates so.

Taking into consideration that the acknowledgement of a child is a legal duty, it is necessary to determine its legal consequences in case of omission or late acknowledgement. Therefore, we wonder: Has the lack of acknowledgement caused damage to the child by harming their right to identity or to other property or extra patrimonial assets? If the answer is positive, let us see if there is a possibility to bring legal action on civil liability in order to obtain an appropriate compensation.

In our Peruvian civil law system, there is no resolution forbidding the application of civil liability regulations for family rights. Therefore, from a regulatory point of view, there would be no obstacle for that.

In summary, the conclusion may be that the fundamental right of every individual to know their biological identity materializes through the right to be acknowledged by our parents. Consequently, the parent must comply their duty from the moment they know to be the father or mother of the child. Likewise, if damages are caused due to non-compliance, civil liability regulations may be applied to enforce the payment of a compensation. To summarize, there must be a compensation if the non-compliance causes damages.)))

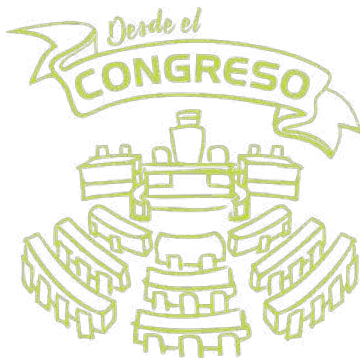
¹ Filiation: Bond that unites a child with their father or mother.

² Peruvian Civil Code, Art. 386.- A natural child is the one conceived and born outside marriage.

³ It should be specified that Acknowledgment is derived from the verb "to acknowledge" which, among the different definitions provided by the Royal Academy of the Spanish Language, is "the act of differentiating or identifying something or somebody by virtue of certain features or characteristics of their own", "grant someone, with duly solemnity, the quality and kinship they have with the one acknowledging and the subsequent rights to it".

⁴ Peruvian Civil Code, Article 410, "The action to declare the extra patrimonial filiation does not expire".

⁵ VARGAS ARAVENA, David G. (2018) "Del deber de reconocer a los hijos no matrimoniales y de la responsabilidad civil por su incumplimiento en el ordenamiento jurídico Chileno" para el Congreso Internacional del Derecho Civil Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca ["The right to acknowledge natural children and the civil liability for its non-compliance in the Chilean legal system" for the Octavo Centenario International Congress on Civil Rights of the University of Salamanca], Tirant lo Blanch, 2018.



En el segundo trimestre del 2023 destacaron dos proyectos de ley que serán debatidos en las comisiones del Congreso de la República. A continuación, presentamos un resumen de ambas iniciativas legislativas.

Fijar por ley los feriados largos para promover el turismo interno¹

Mediante el Proyecto de Ley n.º 5095², se busca reconocer oficialmente los días puente festivos, que crean feriados largos, para promover el turismo interno y la economía nacional. Esta iniciativa incorpora el artículo 6-A al Decreto Legislativo 713, mediante el cual se regulan los descansos remunerados de los trabajadores del sector privado para determinar cuáles serán los días puente festivos.

En la actualidad, estas fechas son establecidas mediante decretos supremos, pero no tienen rango de ley. Por ello, al ser publicadas con pocos días de anticipación, no existe la predictibilidad suficiente para planificar vacaciones que potencialmente beneficien a las empresas del sector turismo a nivel nacional. De aplicarse la propuesta, para el 2024 habría seis días puente festivos con carácter de días no laborables recuperables; mientras que en 2025 serían ocho. Cabe precisar que el Poder Ejecutivo podría decretar días no laborables a los establecidos en la ley cuando lo considere pertinente.

Evitar que bancos cobren deudas desde cuentas sueldo³

La congresista Norma Yarrow, de la bancada de Avanza País, presentó el Proyecto de Ley n.º 4939⁴, que pretende modificar el Código de Protección y Defensa del Consumidor, incorporando el artículo 87-A a la Ley 29571.

El proyecto plantea que la compensación proceda solo cuando la remuneración del usuario exceda los S/2 475 (5 URP), pero solo hasta una tercera parte. Es decir, si una persona gana S/ 2 500, el banco le puede descontar hasta S/ 833.

Esta propuesta viene siendo debatida en las comisiones de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, y Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.)))

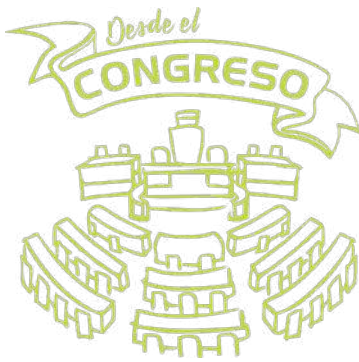
* El Estudio Muñiz presenta bimensualmente a todos sus clientes el producto legal Desde el Congreso; una publicación que contiene una selección de los proyectos de ley que están siendo discutidos el Congreso de la República y que pueden afectar al entorno empresarial. En Columnas publicaremos dos de los varios proyectos publicados y que todavía están en comisiones.

¹ (21 de mayo de 2023). Buscan fijar por ley los feriados largos para promover el turismo interno. La República Perú. <https://larepublica.pe/economia/2023/05/21/buscan-fijar-por-ley-los-feriados-largos-para-promover-el-turismo-interno-proyecto-de-ley-avanza-pais-adriana-tudela-feriados-puente-1907262>

² Proyecto de ley 5095/2022-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTAxODgw/pdf/PL0509520230518>

³ (19 de mayo de 2023). Bancos no podrían cobrarse las deudas desde cuentas sueldo. La República Perú. <https://larepublica.pe/economia/2023/05/17/ministerio-de-economia-bancos-no-podrian-cobrarse-las-deudas-desde-cuentas-sueldo-congreso-sbs-proteccion-al-consumidor-234583>

⁴ Proyecto de ley 4939/2022-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/OTk1OTk=/pdf/PL0493920230510>



In the second quarter of 2023, two bills that will be debated in the commissions of the Congress of the Republic stood out. Below is a summary of both legislative initiatives.

Provide long holidays by law to promote domestic tourism¹

The purpose of the Bill No. 5095² is to officially recognize bridge days, which create long holidays, to promote domestic tourism and boost national economy. This initiative includes Article 6-A in Legislative Decree 713, which regulates paid leave periods for private employees so as to determine which days will be public bridge days.

Currently, these dates are set out through supreme decrees, but are not given law status. Therefore, since they are published only a few days in advance, there is not enough predictability to plan vacations that would potentially benefit tourism companies nationwide.

If the proposal is applied, there would be six holiday bridge days of non-working recoverable nature in 2024; while in 2025 there would be eight. It should be noted that the Executive Branch may mandate additional non-working days to those established by law when deemed appropriate.

Preventing banks from collecting debts from remuneration accounts³

Norma Yarrow, a congresswoman of Avanza País caucus, submitted Bill No. 4939⁴, which seeks to amend the Consumer Protection and Defense Code, incorporating Article 87-A to Act 29571.

The bill poses that the compensation only proceed when the user's remuneration exceeds PEN 2,475 (5 URP, acronym in Spanish for Procedural Reference Unit), but only up to one third of it. In other words, if a person earn PEN 2,500, the bank can deduct up to PEN 833.

This proposal is debated in the Consumer Protection and Regulatory Agencies of Public Services, as well as Economy, Banking, Finance and Financial Intelligence commissions.)))

* Estudio Muñiz bimonthly presents their clients the legal product "From the Congress". It is a publication containing a selection of the bills being discussed in the Congress of the Republic and which can affect the business environment. Columns will include two of several published projects which are still under commissions.

¹ (May 21, 2023). Providing long holidays by law to promote domestic tourism. La República Perú. <https://larepublica.pe/economia/2023/05/21/buscan-fijar-por-ley-los-feriados-largos-para-promover-el-turismo-interno-proyecto-de-ley-avanza-pais-adriana-tudela-feriados-puente-1907262>

² Bill 5095/2022-CR <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTAxODgw/pdflPL0509520230518>

³ (May 19, 2023). Banks would not be able to collect debts from remuneration accounts. La República Perú. <https://larepublica.pe/economia/2023/05/17/ministerio-de-economia-bancos-no-podrian-cobrase-las-deudas-desde-cuentas-sueldo-congreso-sbs-proteccion-al-consumidor-234583>

⁴ Bill 4939/2022-CR <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/OTk1OTk=/pdf/PL0493920230510>

El “beneficio” del *home office* y la aplicación del teletrabajo

Como parte de los beneficios que han venido ofreciendo diversas compañías en el marco de sus políticas de bienestar social e incluso como elemento atractivo para la captación de talento humano, desde periodos previos al inicio de la pandemia derivada de la COVID-19, figura la posibilidad que sus trabajadores puedan elegir un día a la semana o al mes para realizar sus labores mediante la modalidad del *home office*, sin que su otorgamiento generara ningún costo adicional para el empleador; sin embargo, con la publicación y vigencia de la Ley n.º 31572, Ley del Teletrabajo, así como de su reglamento, aprobado por D.S. n.º 002-2023-TR, resulta necesario preguntarse si dicho beneficio constituye teletrabajo.

La trascendencia de absolver dicha interrogante radica, principalmente, en la necesidad de determinar si las exigencias impuestas al empleador para la implementación del teletrabajo, como es por ejemplo su formalización por escrito con precisión de los días de trabajo presencial y remoto; la titularidad de los costos y gastos derivados de los servicios y herramientas de trabajo; la verificación del cumplimiento de medidas mínimas de seguridad y salud en el espacio destinado al teletrabajo, y la implementación de un registro de control de jornada de trabajo, entre otros, deben extenderse sobre el *home office* y por tanto si se mantiene o no como un beneficio atractivo para empleadores y trabajadores.

Al respecto, es de notar que si bien el teletrabajo constituye una modalidad aprobada y vigente en nuestro país desde junio de 2013, bajo los alcances de la derogada Ley n.º 30036, su utilización fue mínima, más aun teniéndose en cuenta que el reglamento de la ley derogada excluía de forma expresa a las labores que se realizaban fuera del centro de trabajo con carácter ocasional, con lo cual el beneficio del *home office*, conforme a los términos antes descritos, no constituía teletrabajo.

Ahora bien, nótese que aun cuando el artículo 3º de la Ley del Teletrabajo lo define como una modalidad especial de prestación de labores, de condición regular o habitual, no efectúa ninguna precisión respecto de los criterios a seguir para delimitar lo que debe entenderse como ocasionalidad en el trabajo a distancia, más aún se precisa que el teletrabajo podrá realizarse de manera total o parcial, sin establecer en este último caso un mínimo de días para que califique como tal, con lo cual puede advertirse que incluso cuando dicha modalidad sea utilizada en una sola oportunidad durante la semana o en el mes las partes deberían cumplir con regular de manera formal los alcances del mismo, incluyendo el determinar quién deberá asumir los gastos derivados de dicha prestación a distancia.

Como puede apreciarse, la regulación actual del teletrabajo resulta más rígida que la anterior y también más onerosa, desmotivando su utilización. Asimismo, tratándose del *home office*, puede advertirse que al estar regulado bajo dichos alcances puede perder el carácter de beneficio que se le asignaba, resultando más conveniente para el empleador la realización del trabajo presencial.

Finalmente, en caso se opte por mantener dicho beneficio como tal, y a fin de sustentar la inaplicación de las reglas del teletrabajo parcial, corresponderá garantizar que su utilización responde a un supuesto imprevisible respecto del cual no puede determinarse una regularidad específica, con lo cual su otorgamiento una vez a la semana o al mes ya no sería viable, sino que debería observar una ocasionalidad de temporalidad mayor.]]



PAOLA DEL VILLAR JARA
Asociada especialista en derecho laboral
Associate, labor law expert
pdelvillar@munizlaw.com

The “benefits” of home office and the implementation of teleworking

Part of the benefits that different companies have been offering within the framework of their social welfare policies and even as an attractive element for human talent recruitment since periods prior to the beginning of the COVID-19 pandemic is the possibility of their workers to choose one day a week or month to work in home office modality, without generating any additional cost for the employer. However, with the publication and enforcement of Act No. 31572, Act on Teleworking, as well as its regulation approved by S.D. No. 002-2023-TR, it is important to ask if said benefit is considered teleworking.

The importance of answering this question lies, mainly, in the need to determinate whether the requirements imposed on the employer for the implementation of teleworking, such as its formalization in writing specifying the days of on-site and telework; the ownership of costs and expenses derived from the services and work tools; the verification of compliance with the minimum safety and health measures in the space reserved for teleworking, and the implementation of a control record of working hours, among others, should be extended to home office and, therefore, whether or not this remains as an attractive benefit both for employers and workers.

In this regard, it should be noted that, although teleworking is a modality approved and in force in our country since June 2013, under the scope of the repealed Act No. 30036, its use was minimum, even more taking into account that the regulation of the repealed act expressly excluded the work performed outside the workplace on an occasional basis. As a result, the benefit of home office, according to the terms described above, did not constitute teleworking.

Now, it should also be noted that even when article 3° of the Act on Telework defines it as a special modality of provision of work, of regular or usual condition, there is no clarification regarding the criteria to follow in order to define what should be understood as “occasional” in remote work. Moreover, it is specified that teleworking may be performed totally or partially, without establishing in the last case a minimum number of days so that it qualifies as such. It can be noticed that, even when this modality is used in a single opportunity during the week or the month, the parties should formally regulate its scope, including determining who will have to bear the costs derived from such remote provision of work.

As it can be seen, the current regulations on teleworking are more strict than the previous ones and also more onerous, thus discouraging its use. Also, in the case of home office, it can be noticed that, since it is governed by said scope, it may lose its nature of benefit attributed to it, being more convenient for the employer to require in-person work.

Finally, in case a decision is made to keep the benefit as such, and in order to support the non-application of the rules of partial teleworking, it will be necessary to ensure its use responds to an unpredictable event with an unspecified regularity, so that it would no longer be feasible to grant it once a week or month, but the temporary nature of its occurrence should be considered higher.)))



Inteligencia artificial y administración de justicia

Aunque parezca, no es el nombre de un guion de película futurista, sino una mezcla de palabras que contienen una antigua idea: usar la tecnología para alcanzar los objetivos más nobles de las civilizaciones humanas, en este caso, lograr resoluciones de conflictos lo más justas posibles.

En nuestro país, el Poder Judicial ha aprobado un proyecto denominado Tucuy ricuy, que viene a ser, precisamente, un software para aplicarse a los procesos judiciales por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Para implementar dicho proyecto se ha instalado un grupo de trabajo que cuenta con la participación de miembros de nuestro Poder Judicial, de especialistas tanto de la Universidad Nacional de Ingeniería como la Pontificia Universidad Católica del Perú y, sobre todo, del laboratorio de innovación e inteligencia artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Este proyecto está diseñado para sistematizar la información relevante para que el juez pueda resolver el conflicto de manera eficiente, es decir, rápida y justa. Al parecer contará con fichas de información que la víctima de violencia o su abogado deberá llenar de manera precisa, la cual será ingresada al software para que este catalogue el caso concreto dentro de un grupo de casos históricos similares con patrones en común y señale posibles cursos de acción aplicando las leyes vigentes.

La realidad que ha permitido la aprobación de este proyecto en nuestro país procede de información del Sistema Integrado Judicial del 2015 al 2018, que lamentablemente ha revelado un crecimiento de 1148% en ingresos de causas nuevas por violencia familiar desde la entrada en vigor de la Ley n.º 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Es decir, la carga que soportan los juzgados por estos casos de violencia familiar es tan abrumadora que

requiere soluciones que permitan resolver los casos con celeridad, pero, sobre todo, con justicia para los ciudadanos involucrados.

Implementado y aplicado este programa, la idea de nuestras autoridades judiciales y de la comunidad jurídica nacional en su mayoría, es replicar el modelo para todos los procesos judiciales, tal como ya se viene realizando en otros países de la región. Argentina ha implementado un sistema de inteligencia artificial denominado Prometea, para la resolución de conflictos contenciosos administrativos y tributarios. En Colombia se viene discutiendo aún la aplicación de PretorIA, un software de similares características para los casos de la Corte Constitucional de dicho país. Brasil cuenta con Víctor, que analiza recursos de apelación.

La tendencia es global, por ejemplo, el gigante asiático China, ha presentado el así denominado Tribunal de Internet de Pekín, un centro de litigios en línea que resuelve casos sencillos destacando no solamente su interfaz con apariencia femenina, con expresiones y gestos, sino, fundamentalmente, el desarrollo del Sistema de Cadena de Equilibrio en el que todo el proceso de acumulación de pruebas puede comprobarse por su trazabilidad. Estonia es otro ejemplo de aplicación de este sistema en el que las partes recurrirán a un sistema digital que analizará la documentación y sentenciará.

Es inevitable que nuestro país implemente no solamente este sistema tecnológico de administración de justicia para los casos de violencia familiar, sino para las demás especialidades que requieren una destacada descarga procesal.

Imaginemos un sistema judicial que, aplicando un algoritmo y accediendo a las bases de datos correspondientes, pueda demostrar en tiempo real que la casa de un ciudadano está siendo indebidamente ocupada, por lo que procede el inmediato lanzamiento. O ahorrarse estudiar cientos de operaciones financieras sospechosas y complicadas para que en dos minutos una inteligencia artificial determine si hay operaciones ilógicas o escondidas para que en base a esas anomalías pueda imputarse sospecha de lavado de activos o de defraudaciones tributarias.

En el caso de las tristemente célebres prisiones preventivas, analizar el verdadero elemento que defina su aplicación: el peligro de fuga, a través de un sistema de puntuación denominado Scoring que analizará los principales arraigos: laborales,

familiares y domiciliarios. Cuántos más puntos, menos riesgo.

La sociedad entre ingenieros informáticos y abogados es una empresa interesante para enfrentar este nuevo y no tan lejano escenario.

Pero claro, las implicancias éticas de este tema son serias. Los algoritmos son construidos por personas de carne y hueso, con sesgos y prejuicios, como todos, por lo tanto, será vital para el desarrollo eficiente de esta nueva forma de administrar justicia, la posibilidad de examinar y supervisar el código de esos algoritmos para evitar que se incorporen esos sesgos o prejuicios intencionalmente. El caso más famoso de cuestionamiento ético es el controvertido algoritmo Compas que se utiliza en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos para hacer una estimación de la peligrosidad y riesgo de reincidencia de los acusados.

Se lo acusó de discriminar a ciertos grupos como los afroamericanos, problema no menor en la potencia norteamericana.

Otro aspecto para evaluar será la aceptación de la ciudadanía peruana, conservadora en su mayor parte.

Lo cierto es que la inteligencia artificial llegó a la aplicación del Derecho para quedarse y, como enseñó Darwin, el éxito de los individuos depende de la adaptación al nuevo entorno.)))



JAVIER CORNEJO PORTOCARRERO
Socio especialista en derecho penal, sede Arequipa
Partner, criminal law expert - Arequipa office
jcomejo@munizlaw.com

Artificial intelligence and the justice administration

Interestingly enough, this is not the name for the script of a futuristic movie, but a mix of words containing an old idea: to use technology to achieve the most noble goals of human civilization, in this case, make dispute resolutions as fair as possible.

In our country, the Judiciary has approved a project called *Tucuy ricuy*, which is, precisely, a software to be applied in legal procedures for violence against women and family members.

To implement this project, a work group was formed with the members of our Judiciary, specialists from both *Universidad Nacional de Ingeniería* [National University of Engineering] and the *Pontificia Universidad Católica del Perú* [Pontifical Catholic University of Peru] and, most importantly, from the innovation and artificial intelligence laboratory of *Universidad de Buenos Aires* [University of Buenos Aires] Law School.

This project is designed to systematize relevant information for the Judge to solve disputes efficiently, i.e., quickly and fairly. It will have information sheets that the victim of violence or their lawyer shall fill up accurately, which will then be entered into the software so it can classify the specific case within a group of similar historical cases with common patterns and indicate possible courses of action applying the current laws.

The reality that allowed the approval of this project in our country comes from the information in the Integrated Judicial System from 2015 to 2018, which has unfortunately revealed a 1148% increase of new causes of domestic violence since the enactment of Act No. 30364, act on prevention, sanction and eradication of violence against women and family members.

This means that the Courts work load for these family violence cases is so overwhelming it requires solutions that allow them to resolve cases with certainty, but, more importantly, with justice for the citizens involved.

The idea of our judicial authorities and the national judicial community for the most part is that, once this program is implemented and put into practice, the model is replicated in all judicial proceedings, as is the case with other countries of the region. Argentina has implemented an artificial intelligence system called *Prometea* for the dispute of contentious-administrative and taxation disputes. In Colombia, debate is still ongoing on the application of *PretorIA*, a software with similar characteristics for Constitutional Court cases in that country. Brazil has *Victor*, that analyzes appeals.

This is a global trend. For example, China, the Asian giant, has presented the so called *Beijing Internet Court*, an online litigation center which resolves simple cases, not only highlighting their

feminine-looking interface with expressions and gestures, but, essentially, the development of the *Balance Chain System* in which every proof consolidation procedure can be verified for its traceability. Estonia is another example of application of this system in which the parties will resort to a digital system that will analyze the documentation and will issue a decree.

For our country, it is inevitable not only to implement this technological justice administration system for domestic violence cases, but also for other areas requiring an important load release of the proceedings.

Let us imagine a judicial system which, by the application of an algorithm and having access to the corresponding data bases, is able to show in real time that the house of a citizen is wrongfully occupied and, therefore, immediately proceed with eviction. An artificial Intelligence could save up studying hundreds of suspicious and complex financial operations and determine in two minutes if there are illogical or hidden operations to charge a suspicion of money laundering or tax fraud based on said abnormalities.

In the case of the sadly notorious preventive custody recourse, it may analyze the real element defining its application - the risk of escape - through a score system called *Scoring* which will analyze the main ties: work, family and residential. More points equal less risk.

The partnership between computer engineers and attorneys is an interesting venture to face this new and not so distant scenario.

But of course, the ethical implications of this issue are serious. Algorithms are created by real-physical people, with biases and prejudices, like all human beings. Thus, the possibility to examine and supervise the code of such algorithms to avoid an intentional addition of those biases and prejudices will be vital for the efficient development of this new form of justice administration. The most famous case of ethical inquiry is the controversial *Compas* algorithm used in the state of Wisconsin, in the United States, to estimate the danger and risk of relapse of the defendants.

It was accused of discrimination towards certain groups such as African-Americans, a significant problem in the North-American country.

Another aspect to ponder will be the approval of Peruvian citizens, who are mostly conservative.

The bottom line is that artificial intelligence applied to Law is here to stay and, as Darwin said, the success of individuals depends on their adaptation to new environments.)))

Webinars

Hemos llevado a cabo distintos webinars con nuestros clientes. Nos hemos ocupado del reglamento de la Ley del Teletrabajo; los riesgos de las descargas de efluentes y aguas residuales; y las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas.)))

We delivered various webinars with our clients. We have addressed the regulation of the Telework Act, the risks of effluent and sewage discharges as well as the modifications to the Act on Administrative Liability of Legal Entities.)))



Incorporación en el área de Competencia

El Estudio Muñiz anunció la incorporación de reconocidos expertos para repotenciar el área de Libre Competencia, Protección al Consumidor, Publicidad, Barreras Burocráticas y Privacidad.)))

Estudio Muñiz announced that acknowledged experts will join our team to boost the areas of Free Competition, Consumer Protection, Advertising, Bureaucratic Barriers and Privacy.)))





Colíderes del área de Propiedad Intelectual

Piero Calderón Oliva y Bruno Merchor Valderrama, socios senior de nuestra organización con más de 25 años de experiencia en temas relacionados con la asesoría, registro y litigio en derecho de autor, marcas, patentes, variedades vegetales, regulación sanitaria, entre otros, liderarán nuestro equipo de Propiedad Intelectual.))

Piero Calderón Oliva and Bruno Merchor Valderrama, senior partners of our organization, with more than 25 years of experience in matters related to counseling, registration and litigation in copyright, trademarks, patents, plant varieties, sanitary regulation, among others. They will lead the Intellectual Property team.))

Nueva sede Chimbote

Continuando con nuestro compromiso con el norte del país, inauguramos nuestra nueva sede en Chimbote, la cual será liderada por destacados expertos de las distintas áreas de especialización con las que contamos.))

We continue our commitment with the north of the country by opening a new office in Chimbote, which will be led by distinguished experts in the different areas of specialization we offer.))



Cuenta TikTok

Estudio Muñiz se une a las nuevas tendencias en redes sociales y estrenamos nuestra cuenta de TikTok, en la que, con un variado y ágil formato, compartimos información que será de mucha utilidad.))

Estudio Muñiz joins the new trends in social networks and launch our TikTok account, where we share very useful information in an assorted and agile format.))



Las Begonias 475, Piso 6
Lima 27 - Perú

T (51-1) 611-7000



www.munizlaw.com



ESTUDIO
MUÑIZ

MUÑIZ
OLAYA
MELÉNDEZ
CASTRO
ONO
& HERRERA
Abogados



Lima - Trujillo - Arequipa - Ica - Chíncha - Cusco - Piura - Chiclayo - Chimbote - Tacna - Ilo - Puno - Juliaca